

Monterrey, N. L., 06 de mayo de 2011.

Versión estenográfica de la sesión pública de resolución de la Sala Regional correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sede en esta ciudad.

Magistrada Presidenta Beatriz Eugenia Galindo Centeno: Buenas tardes. Da inicio a la Sesión Pública de Resolución de esta Sala Regional, correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal, por lo que solicito a la Secretaria General de Acuerdos verifique la existencia del quórum para sesionar válidamente y dé cuenta de los asuntos listados para analizar y resolver en esta sesión, por favor.

Secretaria General de Acuerdos, Martha del Rosario Lerma Meza: Con su autorización, magistrada Presidenta.

Además de usted se encuentran presentes en este salón de Plenos los magistrados Rubén Enrique Becerra Rojasvértiz y Georgina Reyes Escalera, que con su presencia integran quórum para sesionar válidamente en términos de lo establecido en el artículo 193 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Serán objeto de resolución en esta Sesión Pública 156 juicios para la protección de los derechos políticos-electorales del ciudadano, con las claves de identificación, nombres de los actores, órganos partidistas y autoridades señaladas como responsables que quedan precisados en el aviso público fijado en los estrados de esta Sala Regional.

Es la cuenta, magistrada Presidenta, magistrados.

Magistrada Presidenta Beatriz Eugenia Galindo Centeno: Gracias, señora Secretaria. A su consideración, magistrados, los asuntos listados para analizar y resolver. Si están de acuerdo, por favor manifestarlo en votación económica.

Aprobado.

Solicito al licenciado Alfonso Ruiz Elizondo, presente los proyectos de resolución que la ponencia del magistrado Becerra Rojasvértiz presenta a consideración de este Pleno.

Secretario de Estudio y Cuenta Alfonso Ruiz Elizondo: Con su autorización, magistrados, magistrada Presidenta.

Doy cuenta con dos proyectos de sentencia, el primero relativo al juicio ciudadano registrado con la clave SM-JDC-25/2011, presentado por José Guadalupe Céspedes Casa, mediante el cual controvierte la resolución dictada por la Comisión Nacional de Garantías del Partido de la Revolución Democrática en el recurso de queja contra órgano interpuesto para controvertir diversos actos relativos a la sesión del Pleno del Consejo Estatal de dicho Instituto político en Coahuila, celebrada el 20 de febrero del presente año.

En relación a este juicio la ponencia propone atender la causal de improcedencia que plantea el órgano responsable, en torno a que el promovente no agotó la instancia local correspondiente. Para ello se considera que la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana establece la posibilidad

de que un acto como el que se controvierte en el caso que nos ocupa, es decir, emitido por un partido político y que afecta las prerrogativas políticas de las personas puede ser controvertido por el medio de defensa local denominado juicios para la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos.

Al respecto cabe destacar que la hipótesis de procedencia prevista en el artículo 95, fracción IV de la Ley, esta dual referida, hace referencia a la expresión autoridad responsable, y sobre ella debe decirse que abarca también a los partidos políticos cuando sean éstos los que afecten los derechos de los ciudadanos.

En efecto, el artículo 17 del cuerpo normativo indicado establece que por autoridad responsable se entienda que el órgano o entidad que emita los actos, omisiones o resoluciones por las que se violente el interés jurídico de aquel que acuda a solicitar la restitución de su derecho.

En ese sentido, los partidos políticos encuadran en dicha definición legal, dado que se trata de grupos de personas que se proponen conquistar, conservar o participar en el ejercicio del poder y que son concebidos como entidades de interés público en las propias constituciones federal y local, por lo que es evidente que se identifican con el concepto de identidad, entendido éste como una colectividad, institución, establecimiento o agrupación; y por otro lado, pueden ser responsables de las conductas mencionadas en la descripción apuntada.

En ese sentido, al no haber agotado la instancia jurisdiccional local mencionada, lo conducente es declarar la improcedencia del juicio.

En segundo término se propone reencauzar el medio de impugnación que nos ocupa y remitirlo al Tribunal Electoral del Poder Judicial del estado de Coahuila, a fin de que lo sustancia como juicio para la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos y resuelva en plenitud de jurisdicción lo que en derecho proceda, sin que ello constituya pronunciamiento respecto de su procedibilidad.

Lo anterior en virtud de que dicho mecanismo de defensa cumple con los supuestos de previsión legal, aptitud y eficacia para obtener la restitución del derecho violado, mismos que se encuentran señalados en la jurisprudencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es, integración de órganos locales de los partidos políticos nacionales, competencia de los tribunales electorales de las entidades federativas para conocer de esos conflictos.

Adicionalmente se da cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano registrado con la clave de expediente SM-JDC-28/2011, incoado por la Agrupación Política Estatal "Defensa Permanente de los Derechos Sociales" en contra del oficio CEE-PAC/DEAF/CPF/043/2011, emitido por la Comisión Permanente de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en San Luis Potosí, cuyo fin era recordarles sobre el plazo con el que contaba la parte actora para presentar el informe financiero trimestral relativo a la comprobación de su gasto y establecer los requisitos que debía cubrir para ello.

Al respecto, la promovente aduce como concepto de violación que la responsable pretende fiscalizarla con fundamento en preceptos que únicamente le son aplicables a los partidos políticos.

Sobre el tema la ponencia propone sobreseer en el juicio, en virtud de que se actualiza la causal de improcedencia relativa a la falta de definitividad, dado que no agotó el recurso de revisión previsto en las Ley Electoral del estado de San Luis Potosí, procedente para efectuar el estudio relacionado con la legalidad del acto reclamado.

Sin embargo, con el fin de no hacer nugatorio el derecho de acceso a la justicia de la parte actora, se estima pertinente reencauzar el presente medio de impugnación a la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Poder Judicial del estado en cita, a efecto de que se estudie lo relacionado con la legalidad del oficio impugnado.

Por otra parte, la accionante solicita la inaplicación del artículo 37 de la Ley electoral en cita, sobre la base de que el legislador local al momento de crear el órgano que fiscaliza a las agrupaciones políticas en la entidad, debió inspirarse en el precepto 41 de la Carta Magna, en cuanto a que el ente homólogo contemplado en esta última cuenta con autonomía de gestión y conocimientos técnicos en materia contable, a diferencia del previsto en la normativa local, por lo que considera que se vulneraron los principios de imparcialidad y profesionalismo.

En relación a esto se considera que no aplica el requisito de agotar las instancias previas, ya que esto no puede ser atendido por los juzgadores locales, dado que el control de la constitucionalidad de las leyes compete exclusivamente a los Tribunales Federales.

Por tal motivo se pone a su consideración el estudio de agravio en cita, el cual se considera infundado, en razón a lo siguiente:

El Artículo 41 de la Constitución Federal solamente regula la integración, características propias y facultades conferidas al órgano respectivo, y el diverso precepto 116 faculta a las legislaturas locales para que implementen el procedimiento de fiscalización que se adecue a las realidades propias en su estado, con la única limitante de que se respeten los principios que rigen la materia electoral.

Por ello, se arriba a la conclusión de que no existe una directriz constitucional hacia las autoridades parlamentarias de las entidades, en el sentido de que las agrupaciones políticas únicamente pueden ser fiscalizadas por un órgano dotado de autonomía de gestión integrado por profesionales en la materia contable.

Por otro lado, la facultad de los funcionarios que conforman la Comisión Local relativa a instruir la auditoría fiscal y en su momento presentar un proyecto de resolución ante el Consejo Estatal aludido no es incompatible con la diversa a integrar el órgano que va a decidir sobre la procedencia de dicha propuesta, ya que la facultad original de conocer todo lo relacionado con la comprobación de gastos recae exclusivamente en el Pleno del Consejo indicado, y si una minoría de tres de sus nueve integrantes, perdón, y si una minoría de tres de sus nueve integrantes conocen y estudian un asunto antes que el resto, no se genera perjuicio alguno, ya que es posible que los demás consejeros del órgano revisor, por ser la mayoría, modifiquen o incluso rechacen la propuesta.

Además, la Comisión apunta, da cuenta con la facultad discrecional de solicitar la asesoría en la materia a través de despachos contables de reconocido prestigio, cuando así lo considere necesario.

Por lo tanto, se propone sobreseer en el juicio, por cuanto hace a la legalidad del acto impugnado, confirmar el oficio combatido por cuanto hace a la constitucionalidad de la disposición legal que fue motivo de estudio, reencauzar el medio de impugnación a la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Poder Judicial del estado de San Luis Potosí, con la finalidad de que estudie lo relacionado con la legalidad del oficio impugnado.

Es la cuenta, señores magistrados.

Magistrada Presidente Beatriz Eugenia Galindo Centeno: Gracias, señor Secretario.

A su consideración, magistrados, los proyectos de la cuenta.

Si no hay ninguna intervención, si me permiten, en relación con el juicio ciudadano 28, del que se ha dado cuenta, quisiera hacer algunos comentarios iniciando con la mención de que en congruencia con la postura que asumí en la resolución del diverso juicio ciudadano 255 del año 2010, promovido también por la Agrupación Política estatal actora en el juicio al que me he referido y del que se ha dado cuenta, no estoy de acuerdo con el criterio que se sostiene en la parte relativa a que se aborde por esta Sala Regional las cuestiones que se hicieron valer por parte del actor, en cuanto a las cuestiones de constitucionalidad y por cuanto hace a las supuestas violaciones que se plantean de legalidad, sea el Tribunal local quien resuelva lo conducente, a través del reencauzamiento que se está proponiendo.

Mi postura la fundamento, al igual que en aquél asunto al que me he referido, en el hecho de que efectivamente no pasa desapercibido por quien habla el hecho de que el Tribunal Estatal, el que se propone reencauzar el juicio, carece de facultades para pronunciarse acerca de una posible contradicción entre una norma de carácter general y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin embargo, considero que conforme a la legislación del estado de San Luis Potosí, de donde deriva este asunto, existe un medio de impugnación apto para que la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral de esa entidad atienda lo relativo a las cuestiones que se plantean y que obviamente resulten de sus facultades legales para pronunciarse al respecto.

Pues la resolución que pudiera dictar dentro del recurso o el medio de impugnación procedente, al que se reencauza la impugnación, pudiera revocar el oficio reclamado y consecuentemente reparar la violación al principio de legalidad, lo que tornaría innecesario el que esta Sala Regional atendiera los señalamientos relativos a la inconstitucionalidad que se plantea e inaplicación consecuente.

Por otra parte, con esta postura o esta postura no implica limitar la garantía de acceso efectivo a la justicia constitucional respecto al acto controvertido, pues en el caso de que la resolución que llegara a dictar la ahora responsable, que en su caso sea adversa a los intereses del actor, posteriormente podrá este acudir a esta Sala Regional a hacer valer las cuestiones de constitucionalidad y legalidad respecto del oficio impugnado, mediante

los señalamientos a través de los cuales se controvierta la sentencia del tribunal local que se llegue a pronunciar y entonces sí, en ese momento, solicitar, si así considera el actor la inaplicación del precepto que en este momento lo plantea.

Tampoco mi postura sugiere que deba excepcionarse el principio de definitividad al que se ha mencionado en la cuenta, y en consecuencia de ello relevar a los sujetos legitimados de la obligación en agotar las instancias previas, pues en todo caso debe buscarse la reparación de la violación aducida a través de los mecanismos de control local que sean aptos para revocar el acto de autoridad.

Considero que pretender lo contrario desvirtuaría el carácter de excepcional y terminante que tiene el juicio ciudadano, así como de la revisión constitucional puesto que bastaría que cualquier sujeto legitimado haga valer cuestiones de constitucionalidad acerca de un precepto legal para acudir ante este Tribunal sin estar en los supuestos a que refiere la Ley para, la figura del llamado per saltum; pero sobre todo también asumo mi postura en base a que considero que la continencia de la causa es inescindible en tanto que no es posible separarla para estudiarla en distintos medios de impugnación que culminarían en determinaciones parciales, como es lo que se propone al resolver por parte de este órgano jurisdiccional federal parte de la controversia y en otra de ellas remitirla a un tribunal local para que asuma el asunto y lo llegue a resolver.

La Sala Superior ha sostenido el criterio de que todo proceso impugnativo debe concluir necesariamente con una sola resolución, en la que se comprendan todas las cuestiones concernientes al mismo, en su individualidad y en su correlación, desde lo relativo a su procedencia hasta la decisión del mérito sustancial de la controversia con el pronunciamiento sobre las pretensiones y defensas opuestas.

Básicamente en estos argumentos y aspectos es por lo que me permito disentir de la propuesta que presente el magistrado, en relación con el juicio ciudadano 28.

Adelante, magistrado.

Magistrado Rubén Enrique Becerra Rojasvértiz: Sí, solamente brevemente para comentar que igual que en la otra ocasión la postura que se asume parte básicamente del principio de congruencia del dictado de la sentencia entre lo que solicitan las partes y cómo se les contesta o se responde en términos de lo solicitado, y justamente la petición central recae en una especie de incompetencia de origen por parte de quien emite el acto de autoridad; es decir, que si existiese la posibilidad de declarar fundado el agravio a través de la inaplicación de la norma que establece la integración del órgano emisor del acto originalmente combatido, prácticamente si de asumirse como fundada esa propuesta pues prácticamente hace innecesario que se estudie cualquier otro acto que pudiera resultar atentatorio contra los principios de legalidad como así lo hemos sostenido en diversas ejecutorias por esta Sala.

Asimismo, el tema del estudio en vía separada o parcial, como comenta la magistrada, y que atiende mucho a esa inquietud jurídica que plantea, radica básicamente no en que sean sentencias parciales, sino más bien atiende a un principio en mi concepto de orden, dado que creo que es prioritario hacer el análisis de la constitucionalidad para ver si una vez descartado que efectivamente se hayan generado los vicios constitucionales que plantea el promovente, entonces sí ya dar pauta o dar paso a que se haga el análisis de legalidad correspondiente.

Así que en mi concepto creo que todo el proyecto o en esta parte del proyecto lo que se pretende es dar una secuencia lógica al estudio que tal y como se plantea en este caso. Es todo. Gracias.

Magistrada Presidenta Beatriz Eugenia Galindo Centeno: Adelante, magistrada.

Magistrada Georgina Reyes Escalera: Nada más para reiterar en aquel asunto el precedente que usted señalaba y precisamente fue surgido de la ponencia de mi responsabilidad pues para estar de acuerdo y que creo y sigo manteniendo esa misma opinión, en el sentido de que es jurídicamente válido que se pueda, creo que no hay una decisión en este asunto, simple y sencillamente resolvemos la parte que corresponde a la inconstitucionalidad de un precepto que cuyas atribuciones del Tribunal local no las contempla la normativa local o la constitución ni la ley electoral local, entonces nosotros creo que lo que hacemos es pronunciarnos nada más respecto al aspecto de la constitucionalidad, y sigo considerando que es válido enviarlo, reencausarlo para que una vez resuelto este aspecto pueda la autoridad pronunciarse sobre la cuestión del acto impugnado en cuanto al aspecto de legalidad que es competencia definitivamente de ellos.

Entonces, nada más reiterar que en relación con este asunto al ser semejante a aquel que comentaban y que surgió de la ponencia a mi responsabilidad, bueno estoy todavía de acuerdo con ese mismo criterio. Gracias.

Magistrada Presidenta Beatriz Eugenia Galindo Centeno: Si no hay ninguna otra intervención por favor recabe la votación, señora Secretaria.

Secretaria General de Acuerdos, Martha del Rosario Lerma Meza: Con su autorización, magistrada Presidenta.

¿Magistrado Rubén Enrique Becerra Rojasvértiz?

Magistrado Rubén Enrique Becerra Rojasvértiz: Conforme con los proyectos de la ponencia.

Secretaria General de Acuerdos, Martha del Rosario Lerma Meza: ¿Magistrada Georgina Reyes Escalera?

Magistrada Georgina Reyes Escalera: A favor de los dos proyectos.

Secretaria General de Acuerdos, Martha del Rosario Lerma Meza: ¿Magistrada Presidenta Beatriz Eugenia Galindo Centeno?

Magistrada Presidenta Beatriz Eugenia Galindo Centeno: A favor del proyecto en relación con el juicio ciudadano 25 de este año y en contra del juicio ciudadano 28, igual de este año.

Secretaria General de Acuerdos, Martha del Rosario Lerma Meza: Magistrada Presidenta, los proyectos han sido resueltos de la siguiente manera: por cuanto hace al juicio ciudadano 25/2011 ha sido aprobado por unanimidad de votos, y por cuanto hace al

juicio ciudadano 28/2011, el mismo ha sido aprobado por mayoría con el voto en contra de usted.

Magistrada Presidenta Beatriz Eugenia Galindo Centeno: Tome nota por favor que haré llegar mi voto particular.

Secretaria General de Acuerdos, Martha del Rosario Lerma Meza: Sí.

Magistrada Presidente Beatriz Eugenia Galindo Centeno: En consecuencia, en el juicio ciudadano 25/2011 se resuelve:

Primero: Se declara improcedente el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovido por José Guadalupe Céspedes Casas en contra de la resolución del 31 de marzo de 2011, dictada por la Comisión Nacional de Garantías del Partido de la Revolución Democrática en el recurso de queja contra órgano identificado con la clave QO/COAH/37/2011.

Segundo: Se reencauza el escrito de demanda presentado por José Guadalupe Céspedes Casas al Tribunal Electoral del Poder Judicial del estado de Coahuila de Zaragoza, a efecto de que en plenitud de jurisdicción resuelva lo que en derecho corresponda, y para tal efecto se ordena a la Secretaría General de esta Sala Regional que remita las documentales originales atinentes al citado órgano jurisdiccional, previa copia certificada que obra en autos y realice las demás diligencias que correspondan.

Tercero: El Tribunal Electoral del Poder Judicial del estado de Coahuila de Zaragoza una vez que dicte la resolución que corresponda dentro del plazo de tres días deberá informarlo por escrito a esta Sala Regional, remitiendo copia certificada del mismo.

Cuarto: Se apercibe al referido Tribunal Electoral local que en caso de incumplir con lo aquí ordenado se le aplicará alguna de las medidas de apremio previstas en los artículos 32 y 33 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en relación con los numerales 111 a 116 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 28/2011 se resuelve:

Primero: Se sobresee en el presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, por cuanto hace a la legalidad del oficio impugnado, en términos del considerando segundo de esta sentencia.

Segundo: Se confirma el oficio CEPAC/DAF/243/CPF/043/2011, emitido el 5 de abril de 2011 por la Comisión Permanente de Fiscalización del Consejo Estatal y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, por cuanto hace a la constitucionalidad de la disposición legal que fue motivo de estudio, de conformidad con el considerando quinto del presente fallo.

Tercero: Se ordena reencauzar el presente medio de impugnación a la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Poder Judicial del estado de San Luis Potosí, para el efecto único de que previo al estudio de procedibilidad pertinente analice exclusivamente

las cuestiones de legalidad que hace valer la demandante respecto del oficio que se impugna y resuelva lo que en derecho corresponda, de acuerdo con lo señalado en los considerando segundo y sexto de la ejecutoria de mérito.

Maestro Alfonso González Godoy, por favor, presente los proyectos de resolución que la ponencia a mi cargo pone a consideración de este Pleno.

Secretario de Estudio y Cuenta Alfonso González Godoy: Con su venia, Magistradas, Magistrado.

Doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio ciudadano SM-JDC-20/2011, promovido por la agrupación política “Defensa Permanente de los Derechos Sociales”, A.C., en contra del convenio de colaboración celebrado entre el Congreso y el Consejo Electoral y de Participación Ciudadana, ambos de San Luis Potosí, en el que las dos autoridades se comprometieron a realizar eventos con el fin de recabar inquietudes que sirvan para la reforma del Estado en cuanto ve al rubro de la materia electoral.

En el proyecto la ponencia propone desechar de plano la demanda en cuestión, en razón de que la agrupación política actora carece de interés jurídico para controvertir la suscripción del convenio aludido, dado que no afecta su esfera jurídica de derechos.

Lo anterior, en razón de que en el acuerdo de voluntades controvertido los contrayentes observan una postura más bien inclusiva, pues expresan razones tendentes a evidenciar la necesidad de convocar en las mesas de debate a los distintos sectores políticos, académicos y sociales de la entidad, dentro de los cuales están contempladas expresamente las agrupaciones políticas estatales, ello con el fin de recabar inquietudes que puedan plasmarse en el correspondiente proyecto de reforma del estado.

Es por lo anterior que la ponencia estima que con la suscripción del convenio controvertido no se limitan los derechos políticos de la actora, sino que, por el contrario, las agrupaciones políticas son objeto de mención especial como partes integrantes de las discusiones en las mesas de trabajo a celebrarse para la consecución de los fines especificados anteriormente.

A propósito de lo anterior, es importante destacar que la propia actora manifiesta haber asistido a una mesa de trabajo con los integrantes del Consejo Estatal Electoral, en la cual hicieron del conocimiento de las diversas agrupaciones políticas la firma del aludido convenio del cual posteriormente el propio Consejero Presidente le hizo llegar copia.

Por tanto, al quedar acreditado que la suscripción del convenio no afecta el derecho de asociación en su vertiente de participación política en los asuntos políticos de la entidad, la demanda debe desecharse de plano al actualizarse la causal de improcedencia relativa a la falta de interés jurídico de la promovente.

Enseguida, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo a los juicios ciudadanos claves SM JDC 29/2011 al SM JDC 178/2011, promovidos por diversos ciudadanos contra actos de la Vocalía del Registro Federal de Electores, correspondiente a la 03 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Coahuila de Zaragoza, por la ilegal exclusión del listado nominal de electores de la sección 0664 en el Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza.

En principio la ponencia considera necesario precisar el acto impugnado, pues aún cuando los actores reclaman la indebida exclusión del listado nominal de electores correspondiente a su domicilio, los hechos y agravios plasmados en las demandas van dirigidos a controvertir la negativa de la autoridad de proporcionarles los formatos correspondientes y tramite ante la instancia administrativa respectiva, a fin de ser incluidos en la lista nominal de electores de la sección correspondiente a su domicilio.

Asimismo y por cuestiones de economía procesal, creemos necesario acumular los 150 juicios de la cuenta, pues en todos se combaten los mismos actos realizados por idéntica autoridad responsable.

Precisado lo anterior, en concepto de la ponencia asiste la razón a los actores, pues tal como lo manifiesta, la autoridad responsable incumplió con la obligación de proporcionar los formatos necesarios a fin de solicitar la rectificación de la situación irregular en que se encuentra.

Eso es así en virtud de que es un hecho no controvertido que los actores acudieron dentro del plazo previsto en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a consultar el listado nominal de electores y al percatarse que habían sido excluidos de la sección correspondiente e incluidos en otra ubicada en distinto municipio del que radican, solicitaron a la autoridad los formatos atinentes, a fin de pedir la reparación de la irregularidad y ésta se negó a proporcionarles los formatos respectivos.

En el proyecto se razona que la autoridad responsable, al negar normalmente a los actores la posibilidad de promover la instancia administrativa idónea y apta para reparar la presunta violación alegada, violentó la garantía de libre acceso a la totalidad efectiva de sus prerrogativas, pues su obligación fue proporcionarles la documentación correspondiente, a fin de que hicieran valer la reclamación respectiva y seguido el procedimiento, de resolver fundada y motivadamente dentro del plazo legal la solicitud planteada.

Por tanto, estimamos que lo procedente es remitir a la responsable las demandas de juicio ciudadano con la documentación anexa, a fin de que sean tramitadas las solicitudes de rectificación, esto en razón de que existe el tiempo razonable para que el responsable dé curso y resuelva lo que en derecho corresponda, antes de que se lleve a cabo la jornada electoral en la entidad a celebrarse el próximo 3 de julio y además porque en las demandas y constancias adjuntas existen elementos suficientes para que dictamine lo que en derecho proceda.

También la ponencia propone que la autoridad responsable deberá ajustar los plazos de resolución para que en caso de que los actores vean satisfecha su pretensión sean incluido oportunamente en la lista nominal de electores a utilizarse en la próxima jornada electoral o de lo contrario puedan acudir a esta Sala Regional a controvertir la determinación acorde a sus intereses.

Son cuentas, magistradas, magistrado.

Magistrada Presidenta Beatriz Eugenia Galindo Centeno: Gracias.

A su consideración, magistrados, los proyectos de la cuenta.

Si no hay ninguna intervención, recabe la votación correspondiente.

Secretaria General de Acuerdos, Martha del Rosario Lerma Meza: Con su autorización, Magistrada Presidenta.

¿Magistrado Rubén Enrique Becerra Rojasvértiz?

Magistrado Rubén Enrique Becerra Rojasvértiz: A favor de los proyectos.

Secretaria General de Acuerdos, Martha del Rosario Lerma Meza: ¿Magistrada Georgina Reyes Escalera?

Magistrada Georgina Reyes Escalera: De acuerdo con los proyectos.

Secretaria General de Acuerdos, Martha del Rosario Lerma Meza: ¿Magistrada Presidenta Beatriz Eugenia Galindo Centeno?

Magistrada Presidenta Beatriz Eugenia Galindo Centeno: Conforme con los proyectos.

Secretaria General de Acuerdos, Martha del Rosario Lerma Meza: Magistrada Presidenta, los proyectos han sido aprobados por unanimidad de votos.

Magistrada Presidenta Beatriz Eugenia Galindo Centeno: Gracias.

En consecuencia, el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 20 de este año se resuelve:

Único.- Se desecha de plano la demanda promovida por la agrupación política estatal “Defensa Permanente de los Derechos Sociales”, de conformidad con lo expuesto en el último considerando de esta sentencia.

En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 29 de este año y sus acumulados, 30 al 178 de este año, se resuelve:

Primero.- Se acumulan los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano del 30 al 178 de este año al diverso 29 por ser éste el más antiguo.

En consecuencia, glósese copia certificada de este fallo en cada uno de los juicios acumulados.

Segundo.- Se ordena a la Vocalía del Registro Federal de Electores en la 03 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Coahuila de Zaragoza, que tramite y resuelva la instancia administrativa prevista en el artículo 187, párrafo 3, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en término de lo dispuesto en el último considerando de esta sentencia. Para tales efectos, la Secretaría General de Acuerdos de esta Sala Regional remitirá los originales de las demandas y demás constancias aportadas por los actores, previa copia certificada que deje en autos.

Tercero.- Dentro de las 24 horas siguientes a que la autoridad responsable dicte la resolución correspondiente deberá informar a esta Sala Regional del debido cumplimiento

de esta sentencia, adjuntando en original o copia fotostática certificada legible las constancias que así lo acrediten.

Cuarto.- Se apercibe a la autoridad responsable, Vocalía del Registro Federal de Electores correspondiente a la 03 Junta Distrital Ejecutiva, en el Estado de Coahuila, que en caso de incumplir lo aquí ordenado se aplicará la medida de apremio o corrección disciplinaria que proceda, en términos de lo previsto en los artículos 5, 32 y 33 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Licenciado Mario León Zaldívar Arrieta, por favor, presente los proyectos de resolución que la Magistrada Georgina Reyes Escalera presenta a consideración de este Pleno.

Secretario de Estudio y Cuenta Mario León Zaldívar Arrieta: Buenas tardes, magistrados.

Con su autorización, doy cuenta con tres proyectos de resolución relativos a los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, expedientes 21, 27 y 179 de este año.

El primero de ellos fue promovido por Hilda Margarita Gómez Gómez a fin de impugnar la resolución de 24 de marzo del año en curso emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, por virtud de la cual se desechó su recurso de defensa ciudadano, expediente TE-RBC-4/2011. El origen de la cadena impugnativa es la denuncia de hechos presentada por la actora en contra del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en dicha entidad supuestamente por incurrir en diversas irregularidades, misma que fue decretada improcedente por el órgano nacional de dicho instituto político, por lo cual, la demandante acudió a la instancia jurisdiccional local que finalmente determinó el desechamiento de plano del recurso ciudadano por considerar actualizada la falta de interés jurídico.

La pretensión final de la actora consiste en que se disuelva el referido Comité Directivo Estatal debido a las inconsistencias por ella denunciadas. Al respecto, la ponencia propone confirmar la resolución impugnada toda vez que tal como lo concluyó la autoridad responsable la demandante carece de interés para exigir por sí misma y con las calidades que ostenta la disolución del órgano partidista estatal, pues los actos de que se duele no afectan de manera directa y particular su esfera jurídica y además la normatividad partidista no le otorga ese tipo de facultades.

Asimismo, se propone declarar infundado el agravio consistente en que fue indebido el desechamiento del recurso bajo el argumento de que esta Sala Regional al decretar la improcedencia del diverso juicio SM-JDC-9/2011, que reencauzó al Tribunal Electoral Tamaulipeco, no encontró falta de interés jurídico.

En opinión de la ponencia tal apreciación es incorrecta, pues como se expone en el proyecto al advertirse sustancialmente que en aquel proceso se actualizaba la hipótesis e improcedencia de falta de definitividad, se estimó innecesario el estudio de otras causales distintas, dado que la improcedencia del medio impugnativo ya se había generado.

Y si bien en el referido juicio se determinó que el recurso de defensa local podía resultar el medio apto para que la actora alcanzara su pretensión, también se apuntó que ello estaría posible siempre y cuando a criterio del órgano jurisdiccional competente el medio

de defensa cumpliera a su vez por los requisitos de procedibilidad previstos en la legislación electoral local. En tales condiciones, como se anticipó, se propone confirmar el fallo impugnado.

Enseguida se da cuenta con el juicio ciudadano 27 de 2011, promovido por Giuseppe Attilio Falce Tancredi en contra de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral, por conducto de su Vocalía en la 01 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Nuevo León.

A fin de impugnar la resolución de fecha 7 de abril de 2011 por medio de la cual se declaró improcedente en su solicitud de expedición de credencial para votar con fotografía.

El actor argumenta que le causa agravio tal negativa en virtud de que con ello se le impide ejercer el derecho a votar que le otorga la Carta Magna, a pesar de que según manifiesta realizó todos los trámites para cumplir con los requisitos correspondientes, sin que haya sido otorgado el referido documento.

En opinión de la ponencia, el agravio es fundado y suficiente para revocar la determinación de la autoridad responsable. Ello porque del análisis de las constancias que integran el sumario se advierte que el órgano administrativo electoral negó la solicitud de reemplazo de credencial para votar al promovente, sustentado en que la declaratoria de nacionalidad mexicana presentada para la realización del trámite como identificación no es uno de los documentos aprobados por la Comisión Nacional de Vigilancia del Registro Federal de Electores, sino que en todo caso la autorizada es la Carta de Naturalización, la cual debía tramitar como condición para expedirle su credencial.

Sin embargo, se considera incorrecta tal apreciación, dado que si bien es cierto, la mencionada Comisión de Vigilancia tiene facultades para determinar los medios de identidad para realizar los trámites correspondientes al Registro Federal de Electores, mediante sus acuerdos no puede exigir mayores requisitos en forma restrictiva o limitativa en relación con los previstos por la ley, en específico, por el artículo 180 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

En ese sentido, si en autos se encuentra acreditado que el actor, al realizar el referido trámite, además del documento en mención exhibió su pasaporte, cédula fiscal, identificación nacional y, destacadamente, presentó su credencial para votar cuyo reemplazo solicitaba, es obvio que el Instituto Federal Electoral lo tenía plenamente identificado y además registrado en su base de datos por lo que en opinión de la ponencia ante tal circunstancia lógica resulta ilegal exigir diverso medio de identidad.

Por tanto, toda vez que los documentos exhibidos por el actor fueron expedidos por autoridad competente, conforme a la ley, y como se detalla en el proyecto, constituyen un confiable instrumento de identificación, el órgano administrativo electoral responsable debe tomarlos en cuenta y expedir al actor su credencial para votar actualizada, inscribiéndolo en la lista nominal correspondiente a su domicilio.

Por ello, se propone a este Pleno revocar la determinación impugnada.

Finalmente, se plantea para su resolución el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 179/2011, promovido por Ricardo Alberto

González González, en contra del fallo emitido el 4 de abril por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, que confirmó la determinación del diverso Comité Directivo Estatal de dicho ente político en el estado de Zacatecas.

Del análisis de las constancias que integran el sumario, la ponencia advierte que el promovente no agotó la instancia ordinaria antes de acudir a esta Sala Regional, lo cual, según el artículo 10, párrafo uno, inciso d), en relación con el 80, párrafo dos de la ley de la materia, genera la improcedencia del juicio, dado que se incumple con el principio de definitividad.

Ello es así debido a que la legislación del estado de Zacatecas contempla un medio de defensa idóneo para revocar o modificar la resolución que se controvierte y, ante la omisión de promoverlo por parte del actor previamente al presente juicio constitucional, que es de carácter especial y extraordinario, se actualiza tal improcedencia.

Sin embargo, esta consecuencia no implica la ineficacia jurídica de la demanda intentada, de ahí que en el proyecto se plantea reencauzar el presente medio de impugnación al órgano competente: Sala Uniinstancial del Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial de dicha entidad, para que resuelva conforme a sus atribuciones en plenitud de jurisdicción.

Es la cuenta de los tres asuntos, magistrados.

Magistrada Presidente Beatriz Eugenia Galindo Centeno: Gracias, señor Secretario.

A su consideración, magistrados, los proyectos de la cuenta.

Adelante, Magistrado.

Magistrado Rubén Enrique Becerra Rojasvértiz: Gracias, Magistrada Presidente; Magistrada.

Sólo para comentar un par de inquietudes respecto del juicio ciudadano 21/2011.

En este asunto se propone en el proyecto que somete a consideración del Pleno confirmar, en síntesis, que la actora carecía de interés jurídico para denunciar ante el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional diversas irregularidades que atribuía a los miembros del Comité Directivo Estatal en Tamaulipas, que en su concepto motivaban la disolución de este Comité.

En el proyecto se sostiene que la actora carece de interés jurídico dado que no hay una afectación real a su esfera jurídica y, sin embargo, considero que cualquier militante puede contar o debe contar con la posibilidad de poder denunciar ante los órganos competentes de su instituto político diversas anomalías que presuntamente pudieran haber sido cometidas por los funcionarios partidistas.

Y la conclusión a la que arribo parte del razonamiento siguiente: Es evidente que lo que se buscaba a través de esta denuncia era la instauración de un procedimiento administrativo sancionador, en el cual, por regla general, cualquier persona cuenta con el derecho para presentar una denuncia, por tratarse de una cuestión de orden público.

Así, tanto la Constitución General de la República como diversos códigos de procedimientos penales o la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y el propio Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en diversos artículos, en los artículos correspondientes, manejan o refieren la posibilidad de que cualquier ciudadano pueda presentar o pueda denunciar irregularidades, ya sea del orden penal o del orden administrativo.

Y si bien es cierto que las legislaciones prevén expresamente esa posibilidad, a diferencia del caso que nos ocupa, respecto de los estatutos del Partido Acción Nacional, considero que al estar siendo tutelados, a través de este procedimiento, intereses más bien de orden público, de orden colectivo y no tanto intereses particulares, considero que estos mecanismos de defensa de alguna manera pueden iniciarse de oficio cuando el propio órgano de investigación tenga el conocimiento de la posible comisión del ilícito o la irregularidad, o a petición de parte, es decir, a través de la recepción de una denuncia que puede presentar cualquier persona.

Es decir, que en los procedimientos de este orden o de esta naturaleza rige el principio inquisitivo sobre el dispositivo, lo cual se traduce, entre otras cuestiones, en que el órgano que se encarga de la conducción del procedimiento simplemente se encuentra obligado a recibir la denuncia, valorar los hechos, las pruebas que se presentan y de alguna manera analizar, si se encuentra evidentemente sustentada a efecto de considerar que si existen indicios suficientes y creíbles, pueda iniciar el procedimiento administrativo sancionador, que empieza con la parte de la investigación de los hechos denunciados, así como con la conducción del procedimiento hasta llegar a la resolución correspondiente.

De ahí que considero que cuando cualquier militante que no se le está afectando, como se señala en el proyecto, justamente, que no se le afecta un derecho o la titularidad de un derecho sustantivo, puede contar con la posibilidad de presentar las denuncias y, por lo tanto, su actuación queda muy reducida en el procedimiento administrativo sancionador solamente a la presentación de la denuncia, es decir, a poner en conocimiento los hechos o irregularidades que considere, así como adjuntar las pruebas que considere correspondientes.

Pero hasta ahí quedaría prácticamente agotada la intervención de los ciudadanos o, en este caso, de los militantes, y corresponderá por supuesto ya al órgano que sea el competente para tal efecto, conducir la investigación, si así lo considera correspondiente, y resolver conforme a derecho.

En consecuencia, a diferencia de lo que se sostiene en el proyecto, difiero en que si bien se pudiera contar, como lo he señalado en algunos casos, con una normatividad específica que le faculte expresamente al ciudadano, o en este caso al militante, para estos efectos de la presentación de la denuncia, considero que pasa a un segundo término el que esté o no previsto en la legislación, que ojalá, o en la normatividad correspondiente, que ojalá, bueno para evitar cualquier duda, así lo estableciera y de ahí que reconozco que la parte del procedimiento que regula el acto originalmente impugnado, pues carece de muchas disposiciones que regulan justamente este procedimiento.

En consecuencia, así como también lo ha resuelto la Sala Superior en distintos asuntos que han sido motivo incluso de jurisprudencias y tesis relevantes, que pueden aplicarse, en mi concepto, al presente caso, incluso al resolver un asunto del estado de Baja

California señaló una tesis o sustentó la tesis siguiente, dice: “El procedimiento administrativo sancionador electoral”, legislación del estado de Baja California. Y centralmente sustentó que las denuncias de hechos o conductas de partidos políticos, puesto que estaba la ley de Baja California referida justamente a esta titularidad de derechos o de denunciar a partidos políticos, dice: “Las denuncias de hechos o conductas de partidos políticos que se consideren violatorias de la normatividad electoral y que por ende merezcan la aplicación de las sanciones previstas en la ley pueden ser presentadas por los partidos políticos sujetos regulados específicamente, o bien, por cualquier otro ciudadano o ente que tenga conocimiento de ellos”.

Y en el presente caso lo que se buscaba, o lo que considero que buscaba, la hoy actora era la iniciación de un procedimiento sancionador que culminara con la disolución del Comité bajo las irregularidades, hechos o supuestos que ella había manejado. De ahí que considero que todos los militantes de los partidos políticos, en el caso en específico, pudieran tener ese derecho de presentar o de poner en conocimiento de sus autoridades, en específico de los órganos partidistas, irregularidades, hechos que consideren que sean violatorios, no solamente de lo que corresponde a su esfera jurídica, sino en términos generales sobre respecto de la conducta que deben de vigilar.

De ahí que yo consideraría que sí tuviera la posibilidad de presentar la denuncia, aunque su participación, insisto, en este procedimiento se viera estrictamente reducida a ese punto nada más.

Muchas gracias, magistrada.

Magistrada Presidenta Beatriz Eugenia Galindo Centeno: ¿Alguna otra intervención?

Adelante.

Magistrada Georgina Reyes Escalera: Muchas gracias. Atendí puntualmente los planteamientos que hace el magistrado Becerra, y partiría yo de la base de que la pretensión de la ciudadana es la disolución del Comité Ejecutivo Estatal en Tamaulipas del Partido Acción Nacional.

Entonces, ella plantea una demanda ante el órgano partidista interno que consideró que era el competente para resolver. Yo estoy de acuerdo con usted en que todo acto que sea contrario a la ley debe de sancionarse. Sin embargo, discrepo, relativamente, en lo que plantea de que para mí sí debe necesariamente que estar regulado el procedimiento a seguir, porque si no, entonces, cómo se plantearía o en qué cauce o de qué forma o de qué forma se tendría que hacer o atender el procedimiento, y tiene que estar regulado, por supuesto, el procedimiento para tal efecto.

Refiero esto porque precisamente con la misma inquietud que usted plantea, nosotros en la ponencia también así lo visualizamos; sin embargo, al ir leyendo con más detenimiento cada una de las constancias y en especial la demanda, así como la sentencia tanto del Tribunal que resolvió, como del órgano partidista, y en relación esto con la normativa del partido, así como, bueno, principalmente la normativa del partido tanto sus estatutos, como los reglamentos correspondientes, puedo decir que hay un procedimiento que refiere a sancionar precisamente a militantes o integrantes del propio partido político, y está ahí regulado el procedimiento.

Sin embargo, también partimos de los derechos que tienen atendiendo a la resolución que estrictamente se impugna aquí con nosotros, que es la del tribunal local que resolvió, también nos dimos a la tarea de analizar los derechos y obligaciones de los militantes, así como de los órganos que conforman el partido, concretamente del Comité Municipal del cual la actora precisamente es presidenta, porque planteaba su impugnación en su calidad de militante y a la vez como presidenta del Comité.

Desafortunadamente, decía que en el procedimiento que regula sancionar a militantes del partido no encontramos una hipótesis en la que pudiéramos encuadrar el procedimiento, precisamente, que ya estaba pretendiendo instaurar y sí, por el contrario, encontramos el procedimiento relativo a la disolución de un Comité y en esa normativa, precisamente, en los Estatutos, precisamente se establece a petición de quién se puede manejar el procedimiento y, exclusivamente, en cuanto al supuesto que se está planteando por la ciudadana, que es la disolución del Comité Ejecutivo Estatal en Tamaulipas.

Entonces, viendo lo limitado de, precisamente, también de las normas que se vinculan con este procedimiento, bueno, pues encontramos que pueden iniciarse o puede hacerse a petición de un Comité Municipal, pero como órgano colegiado, y precisamente con un porcentaje que conforman ese Comité. Incluso, creo que ahí encontramos también una especie, cierta problemática de interpretación incluso de esa fracción en específico, de ese artículo, de cómo está redactado.

Pero sin entrar a ese planteamiento, bueno, pues así advertimos que definitivamente en el concepto de la ponencia, pues sí considerábamos que había una regulación y que por eso, efectivamente, no podíamos considerar que ella pudiera iniciar ese procedimiento, cuya pretensión concreta, directa y claramente establecida es la disolución del Comité Ejecutivo Estatal.

Entonces, derivado de ello, al encontrar ese procedimiento donde sí se especifica o sí se contiene ese hipótesis y está señalado, pues definitivamente consideramos que ni como militante, ni como Presidenta del Comité, pues tiene interés jurídico porque no afecta directamente a la esfera jurídica inmediata, como decía usted, de la ciudadana que está denunciando, con la referencia de que en algunos aspectos que usted está refiriendo, como lo dije, por supuesto que creo que todo acto que sea contrario a la norma o a la ley, por supuesto que tendría que estar, definitivamente ser sancionado, si así se acreditara, pero a diferencia –reitero- creo que tiene que haber el procedimiento o los cauces o la norma o la regulación relacionada o cuando menos que nos permita, pues, así analizarlo, porque no podría partirse, desde mi punto de vista, de la nada.

Muchísimas gracias.

Magistrada Presidente Beatriz Eugenia Galindo Centeno: Magistrado.

Magistrado Rubén Enrique Becerra Rojasvértiz: Nada más para comentar que respecto del procedimiento que alude la Magistrada Georgina Reyes, en cuanto al sujeto que podía estar legitimado, difiero en esa parte en virtud de que considero que es cuando la normativa estatutaria establece, dentro de un catálogo de supuestos de las causas por las cuales se podrían iniciar estos procedimientos, considero que lo establece más que como un sujeto legitimado, como un supuesto de procedencia de la declaración de la disolución del órgano, dado que justamente se establece en una de las últimas, uno de los últimos incisos y respecto de los incisos previos, supuestos previos, ya no prevé quién

pueda ser sujeto legitimado de alguna manera o que tuvieran interés para promover o dar a conocer estos hechos.

Entonces, si bien en mi concepto se puede confundir o fundir la parte de sujeto legitimado, que es las dos terceras partes de estos órganos que señalan, yo desde mi concepto lo veo más bien como un supuesto de procedencia de la declaración de esta mayoría calificada para efectos de que se inicie el procedimiento.

Eso sería nada más mi puntualización. Gracias.

Magistrada Presidente Beatriz Eugenia Galindo Centeno: Sí, adelante.

Magistrada Georgina Reyes Escalera: Perdón, ya por último. Sí, sí coincido con usted, precisamente para iniciar el procedimiento e incluso buscábamos en el propio expediente si había una constancia que nos permitiera advertir que la presidenta del comité hubiera sometido a consideración de ese comité la cuestión de los hechos que ella estaba contemplando como incorrectos por parte, en el actuar del Comité Estatal, para efecto de saber.

Bueno, ella lo planteo ante el comité y pudiera considerarse que hubo una cuestión previa como órgano y ella lo planteara a su vez, pero desafortunadamente lo hizo únicamente de *mutuo proprio*.

Pero creo, y lo comentamos también, creo que en la cuestión de la normativa del partido encontramos que hay mucha deficiencia todavía y en especial ahora en este aspecto que los procedimientos sancionatorios que debía contemplarse y ampliarse en eso.

Y con respeto lo digo al legislador y a usted también.

Muchas gracias.

Magistrada Presidenta Beatriz Eugenia Galindo Centeno: Si no hay ninguna otra intervención por favor recabe la votación.

Secretaria General de Acuerdos Martha del Rosario Lerma Meza: Con su autorización Magistrada Presidenta.

¿Magistrado Rubén Enrique Becerra Rojasvértiz?

Magistrado Rubén Enrique Becerra Rojasvértiz: En contra del proyecto del juicio ciudadano 21/2011 y a favor del resto de los proyectos de la cuenta.

Secretaria General de Acuerdos Martha del Rosario Lerma Meza: ¿Magistrada Georgina Reyes Escalera?

Magistrada Georgina Reyes Escalera: A favor de los tres proyectos.

Secretaria General de Acuerdos Martha del Rosario Lerma Meza: ¿Magistrada Presidenta Beatriz Eugenia Galindo Centeno?

Magistrada Presidenta Beatriz Eugenia Galindo Centeno: De acuerdo con todos los proyectos.

Secretaria General de Acuerdos Martha del Rosario Lerma Meza: Magistrada Presidenta los proyectos han sido resueltos de la siguiente manera:

Por cuanto hace al juicio ciudadano 21/2011 ha sido aprobado por mayoría de votos con el voto en contra del Magistrado Rubén Enrique Becerra Rojasvértiz.

Y por cuanto hace a los juicios ciudadanos 27 y 179, todos de este año, han sido aprobados por unanimidad de votos.

Magistrada Presidenta Beatriz Eugenia Galindo Centeno: Gracias.

Adelante Magistrado.

Magistrado Rubén Enrique Becerra Rojasvértiz: Nada más para presentar el voto correspondiente al proyecto, la ejecutoria.

Magistrada Presidenta Beatriz Eugenia Galindo Centeno: Bueno, para que tome nota secretaria.

En consecuencia en el juicio ciudadano 21 de este año se resuelve:

Único.- Se confirma la resolución de 24 de marzo de 2011 emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, en el recurso de Defensa de Derechos Político-electorales del ciudadano, identificado con el número de expediente, TE-RDC-004/2011. En términos del considerando sexto de esta ejecutoria.

En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, 27 de este año se resuelve:

Primero.- Se revoca la resolución de fecha 7 de abril de 2011, emitida por el vocal del Registro Federal de Electores de la 01 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Nuevo León, mediante la cual declaró improcedente la solicitud de expedición de credencial para votar presentada por Giuseppe Attilio Falce Tancredi.

Segundo.- Se ordena a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, por conducto de su Vocalía en la referida Junta Distrital, para que dentro del plazo de 10 días, contados a partir del siguiente al que reciba la notificación, expida y entregue la credencial para votar actualizada al ciudadano Giuseppe Attilio Falce Tancredi y lo inscriba en la lista nominal correspondiente.

Tercero.- Una vez cumplido lo anterior, la mencionada autoridad administrativa electoral deberá informarlo por escrito a esta Sala Regional dentro de las 24 horas siguientes, acompañando en original o copia certificada legible la documentación que así lo acredite, apercibida que de no acatar lo ordenado en tiempo y forma, se actuará conforme a lo dispuesto por los artículos 5, 32 y 33 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y 112 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Y en el juicio ciudadano 179 de este año, se resuelve:

Primero.- Es improcedente el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, promovido por Ricardo Alberto González González.

Segundo.- Se reencauza el presente juicio a la Sala Uniinstancial del Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado de Zacatecas, a efecto de que resuelva lo que en derecho corresponda, en los términos expuestos en el considerando último de la presente sentencia.

Para ello se ordena a la Secretaría General de Acuerdos de esta Sala Regional que remita las constancias originales a la referida autoridad jurisdiccional, previa copia certificada que se deje en el expediente y realice las diligencias pertinentes.

Tercero.- Una vez emitido el fallo respectivo, dentro de las 24 horas siguientes el Tribunal Electoral mencionado deberá informarlo por escrito a esta Sala Regional, remitiendo en original o copia certificada legible la documentación que así lo acredita.

Cuarto.- Se apercibe a la Sala Uniinstancial del Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado de Zacatecas que de incumplir con lo ordenado se le aplicará alguno de los medios de apremio establecidos en los artículos 32 y 33 de la ley de la materia 111 a 116 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Magistrados, al haberse agotado la resolución de los asuntos propuestos para esta sesión pública, siendo las 15 horas con 3 minutos se da por concluida la sesión.

Gracias.

-----oo0oo-----